

Los nuevos nacionalismos

Eric J. Hobsbawm

Eric J. Hobsbawm (1917), uno de los historiadores europeos más influyentes, fue hasta su jubilación profesor de Historia Económica y Social en el Birbeck College de la Universidad de Londres. El presente artículo constituye la versión revisada de una conferencia pronunciada en 1999 a invitación de la Fundación Bertelsmann.

¿Es realmente imposible que los europeos convivan en Estados democráticos sin separarse? Desde la caída de los imperios multinacionales autoritarios al final de la Primera Guerra Mundial los europeos no han conseguido formar Estados liberal-democráticos estables en los que se garantice la convivencia pacífica de diferentes grupos nacionales. Así lo constata Mark Mazower en su libro *Dark Continent*, una historia de Europa en el siglo XX. Y ya John Stuart Mill había observado que «es prácticamente imposible la existencia de instituciones libres en países con nacionalidades diferentes». Tras la democracia, así reza el argumento, están la división territorial, las deportaciones de masas y los exterminios, que hoy se conocen como «limpiezas étnicas», o en su caso la asimilación en masa, en la medida que el pueblo oficialmente titular del Estado esté dispuesto a ello. Desde 1918 se ha verificado una creciente homogeneización nacional de los Estados. Guerras, deportaciones y genocidios han conducido a esto, en gran medida, en los países del este de Europa Central después de 1945. Desde 1989 vuelve a haber guerras, deportaciones y genocidios en ese último gran territorio europeo en el que desde tiempos inmemoriales habían convivido pueblos de diferentes etnias y lenguas, religiones y tradiciones. Ciertamente, estas catástrofes han destrozado la antigua Yugoslavia. Lo que no consiguieron las guerras turcas y las guerras balcánicas lo hemos consumado nosotros, los europeos actuales: y digo «nosotros» porque, sin duda, los Estados de la Unión Europea se implicaron desde comienzos de los años noventa en igual medida que los herederos de Tito en la destrucción de Yugoslavia.

La nación étnicamente homogénea es una invención muy tardía

La concepción de un mapa político en el que cada Estado territorial claramente delimitado corresponda idealmente a un único «pueblo» lingüístico y étnicamente definido o pertenezca a un «pueblo» así caracterizado, es una novedad absoluta en la historia universal.

Como programa prácticamente no se encuentra antes del siglo XIX. Los Estados nacionales homogéneos en el sentido actual del término, por otra parte, eran algo totalmente irreal en aquella época. Incluso hoy fuera de Europa sólo existen, en el mejor de los casos, dos o tres Estados que correspondan a esta idea —Corea, Japón, quizá Mongolia— y en la misma Europa, tras un siglo de muertes y deportaciones, la lista no es muy larga.

El Estado moderno tuvo que definirse ya desde un principio por su postura ante la religión: si asumía una religión de Estado (*cuius regio, eius religio*), si se mantenía como autoridad confesionalmente neutral o si actuaba como institución conscientemente laica relegando la religión a la vida privada del ciudadano. Con la dimensión nacionalitaria, sin embargo, sólo tuvo que confrontarse en el siglo XIX. E incluso entonces sólo se convirtió en un problema serio en determinadas circunstancias. Europa Occidental, por ejemplo, no tenía con anterioridad a la Primera Guerra Mundial —salvo dos excepciones (Irlanda y Noruega)— ningún problema «nacional» en el sentido actual, es decir, que pusiese en cuestión la unidad política de los Estados. Y desde luego no estaba en cuestión la coexistencia física de los pueblos. Sólo nuestro siglo ha traído a Europa el exterminio sistemático de pueblos.

La nación se convirtió de una fuerza unificadora de Estados en una fuerza divisora de Estados.

El hecho de que gentes de orígenes, lenguas y culturas diferentes viviesen en el seno de entidades estatales amplias bajo un solo gobierno parecía cosa obvia, precisamente en los albores del Estado nacional moderno, que es históricamente el objetivo definido de los nacionalismos. Para los revolucionarios americanos y franceses «el pueblo» —es decir, «la nación»— estaba integrado, justamente, por el conjunto de los ciudadanos que se desvinculaban conscientemente de los particularismos de costumbres, identidad local, idioma, origen o (como se dice en la Constitución americana) religión.

Esto era así tanto para los americanos y franceses, de orientación universalista, como para los nacionalismos de alemanes e italianos, inicialmente deudores de criterios cultural-lingüísticos y étnicos. Tanto unos como otros alimentaban por principio aspiraciones de unidad tendentes a superar los particularismos.

Precisamente por eso no hubo en el siglo XIX casi ningún movimiento nacional, aun entre las naciones más pequeñas, que no fuese concebido a la vez como movimiento de unidad, esto es: como movimiento favorable a la unificación de diferentes poblaciones en un Estado —así, los checos y los eslovacos, los eslavos del sur, e incluso a veces el conjunto de los pueblos balcánicos—. A la luz de las ideas de entonces, incluso de las de coloración nacionalista, la nación debía constituir un progreso histórico en el camino de la pequeña comunidad a la comunidad mayor, que estaba llamada a devenir al final comunidad mundial. No se consideraban viables los pequeños Estados.

Pero en una fase ulterior el criterio étnico-lingüístico se convirtió en dominante en cuanto a la nación. Según este criterio, no podía existir un Estado nacional integrado por diferentes grupos, sino sólo un Estado como expresión de un pueblo único y homogéneo identificado con éste, que en el mejor de los casos permitiría «la participación de los otros, en tanto que minorías, en los derechos y deberes del pueblo principal». O que no la permitiría, como por ejemplo en el caso de los árabes en Israel —definido como Estado de los judíos— o como el Estado letón que no reconoce a la mitad de su población la condición de letones autóctonos. Desde que a Lenin y al presidente Wilson, es decir, desde que a los políticos se les ocurrió definir la «nación» del Estado nacional territorial no en términos políticos sino etnográficos y lingüísticos, y acordar a las comunidades así definidas el derecho de autodeterminación, se acabaron los Estados nacionales heterogéneos. En los tratados de paz firmados tras la Primera Guerra Mundial —pero también, y esto no deberíamos olvidarlo nunca, desde la Revolución de Octubre— se elevó a norma política de los nuevos Estados el nacionalismo étnico-lingüístico. Pagamos todavía hoy, como muestra la guerra en los Balcanes, los pecados de los políticos que tras la Primera Guerra Mundial emprendieron la tentativa de hacer coincidir el mapa político de Europa con el mapa de lenguas y pueblos.

De esta forma la nación se convirtió de una fuerza *unificadora* de Estados en una fuerza *divisora* de Estados. Hacia 1900 existían en Europa un total de 19 estados reconocidos. A principios de 1938 eran 29. Hoy son 39 o —si contamos la parte turca de Chipre— 40, y eso sin considerar los estados transcaucásicos y la autonomía en la práctica ilimitada de las repúblicas nacionales de Rusia —los tártaros, baskires, calmuco, chechenos, etcétera—. Con la previsible derrota de Serbia podrían sumarse otros dos o tres estados nuevos salidos de la antigua Yugoslavia. No cuento los miniesta-



dos europeos, a pesar de que Andorra, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y similares son considerados desde comienzos de los años noventa como «naciones», es decir, como miembros de las Naciones Unidas. Antes de 1914 nadie, salvo los filatéticos, los habría considerado seriamente como parte del sistema de Estados.

¿Es la xenofobia la cara oculta de la democracia?

Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con la evolución de la democracia? Visto históricamente, el nacionalismo etnolingüístico forma parte de la época de democratización política que se inicia a finales del siglo XIX. Ahora bien, la democratización libera también la xenofobia como fuerza política. No viene «de arriba», sino «de abajo», aunque a menudo sea manipulada desde arriba. En modo alguno quiero exonerar a la democracia. La democracia política basada en elecciones es hasta hoy imposible cuando, como sucede en Irlanda del Norte, los electores votan exclusivamente según la nacionalidad o la confesión, y la política no puede ser reducida a un denominador común.

Ahora bien, no es lícito derivar el genocidio del sufragio universal. Está demostrado que en las democracias se puede convivir pacíficamente, aunque no haya afecto entre unos y otros. Al fin y al



cabo la convivencia social –lo mismo que la convivencia entre Estados– no se basa en el amor y la amistad, sino en la comprensión de que la coexistencia con otros es no sólo posible, sino necesaria y normal. Y así sucede en Estados Unidos a pesar de todas las tensiones. ¿No es significativo que sea sólo en Europa donde existen movimientos políticos que querrían expulsar de la nación a las gentes de otro color? No: una democracia política integrada por pueblos dife-

renciados es posible, aunque esté siempre amenazada por la xenofobia.

Así pues, que los pueblos estén dispuestos a convivir en un Estado no depende, en última instancia, de la naturaleza de las constituciones políticas. Ciertamente, las deportaciones masivas y el genocidio están inscritos en el Estado nacional de base étnica, pero eso son casos extremos. Por lo demás, son la herencia del imperialismo y la descolonización. En Europa forman parte de la historia todavía inconclusa de los tres grandes desastres de nuestro siglo: las dos guerras mundiales y la mayor de estas catástrofes, de la que Europa y el mundo no van a recuperarse tan rápidamente, a saber, la desintegración de los sistemas comunistas de Occidente. Aun en aquellos lugares donde estos desastres no han llevado a la barbarie, lo que se ha producido, por ejemplo en los Balcanes, ha sido en todo caso el caos, es decir, el colapso del orden estatal y jurídico, que ha dado rienda suelta a todo tipo de inhumanidades. Thomas Hobbes, así me lo parece, es el filósofo de nuestro terrible siglo. El filósofo que nos enseñó que aun el peor Estado, pero que garantice el orden, es siempre mejor que una guerra de todos contra todos.

Actualmente comprobamos que incluso en los Estados más estables la convivencia entre pueblos se hace cada vez más problemática, cosa que, por lo demás, tampoco puede despacharse tan fácilmente con algunas observaciones críticas sobre los errores del presidente Wilson o de Lenin. Pero ¿cómo se ha llegado a una situación como la actual, en que la xenofobia prácticamente ha sustituido a las viejas ideologías de masas? ¿Cómo puede ser que incluso los más antiguos y estables Estados basados en el patriotismo civil –como por ejemplo Gran Bretaña– den la impresión de que podrían acabar desguazados?

Una mirada al proceso de democratización podría, tal vez, ofrecer una respuesta. Como señaló poco después de la guerra el sociólogo inglés T. H. Marshall, la democratización se había detenido en la equiparación en cuanto a derechos civiles y políticos y tenía que ser completada con la consecución de los derechos sociales de ciudadanía para todos. A esta gran tarea se aplicó en los años dorados de la postguerra el Estado de Bienestar tal como se configuró en Occidente. Pero el cambio de coyuntura de principios de los años setenta hizo que volviesen al orden del día los viejos problemas del capitalismo de entreguerras: crisis, inseguridad, paro masivo. Como consecuencia de ello el Estado de Bienestar –y, por lo demás, también el movimiento obrero– quedó severamente dañado. Las actitudes de color nacional volvieron a cobrar fuerza. El viejo grito: «Los extranjeros son culpables. Viven a nuestra costa y nos roban el trabajo y la vivienda» volvió a escucharse y resultaba mucho más convincente a la sazón, en tiempos de crisis, que en los decenios marcados por el milagro económico y el milagro del bienestar social europeo. No es ninguna casualidad que en Francia el Front National goce entre los parados de más simpatías que los otros partidos.

Pero estas explicaciones son insuficientes. Los nacionalismos han entrado en este último tercio del siglo en una nueva fase, lo que resulta particularmente visible en los antiguos Estados constitucionales de Occidente. Y esto es especialmente claro desde los años sesenta, en que se produjo una inflexión político-cultural. Entonces se descubrió en Estados Unidos la llamada *new ethnicity*. Los inmigrantes no querían sencillamente convertirse en norteamericanos, sino seguir aferrándose a sus identidades étnicas o, en su caso, redescubrirlas. «Ethnicity, identity groups, identity politics, multicultural», eran los nuevos lemas. En los años sesenta el separatismo se convirtió en Quebec en un movimiento político serio y en Gran Bretaña los partidos nacionalistas de Gales y Escocia conquistaron por primera vez un apoyo electoral significativo. La división en la práctica de Bélgica tuvo lugar entre 1962 –fijación de la frontera lingüística– y la reforma constitucional de 1970. Por primera vez se puso seriamente en cuestión la unidad de Estados constitucionales antiguos y estables por movimientos secesionistas.



Pero en este caso, a diferencia de lo acaecido en los Balcanes, lo que se pretendía, con todo, no era propiamente la fundación de Estados completamente independientes, objetivo principal hasta aquí de los movimientos nacionales. Los nuevos movimientos son más bien síntomas de la crisis del Estado nacional clásico. La desintegración de la Italia unificada que persigue la Lega Nord es exactamente lo contrario del nacionalismo tal como lo entendía Mazzini en el siglo XIX. Muchos nacionalismos son, así, parte de una búsqueda de la comunidad perdida. En una época en la que todo es inseguro, los individuos buscan una respuesta segura, invariable y garantizada para siempre a la pregunta: ¿a qué pertenezco yo, de qué formo parte? Esta búsqueda conduce a la denominada política de identidad. Y no sólo, por cierto, bajo la bandera de la «etnicidad», sino también bajo cualquier otra que permita una formación de grupos separados: género, raza, religión, preferencia sexual, o lo que sea.

Las bombas de la OTAN no sirven contra los nacionalismos

Y en este punto volvemos otra vez a la tragedia de Yugoslavia. Sin un «los otros» no existe un «nosotros». Y «nosotros» definimos nuestro grupo cuando destacamos lo que nos separa de «ellos».

La sociedad y la economía modernas son una maquinaria para la homogeneización cultural de la que se defienden los grupos y culturas amenazadas trazando unas fronteras cada vez más definidas entre «nosotros» y «los otros». La injusticia es, naturalmente, la línea de separación más nítida y segura. Por eso es importante para todo grupo de identidad sentirse víctima en relación a los «otros» o, mejor dicho, en relación *al* otro porque mayormente es de *un* grupo concreto del que hay voluntad especial de desmarcarse: el nacionalismo escocés de Inglaterra, el catalán de España, los albaneses de los serbios y viceversa. Ambas partes se sienten perjudicadas y a menu-

Pero, ¿qué es lo que determina estas identidades? No es lo que une a sus miembros, sino lo que les separa de otros, aquello que excluimos —considerándolo «los otros»— de nuestra comunidad imaginada o, también, lo que nos excluye a nosotros de su grupo.

La sociedad y la economía modernas son una maquinaria para la homogeneización cultural.



do lo están de hecho. Y sin embargo en los Estados democráticos esto es sólo raramente una cuestión de vida o muerte y hace muchísimo que no tiene las consecuencias devastadoras que actualmente están viviendo los desdichados pueblos balcánicos entre las ruinas de Yugoslavia.

Los nacionalismos de este tipo son destructores de los Estados y no sólo porque entretanto amenacen también a los Estados nacionales más antiguos. También socavan desde dentro a los Estados al desacreditar aquello que nos une a todos, por ejemplo la ciudadanía. Los

nuevos nacionalismos hacen todo lo posible por reducir la existencia multidimensional del hombre en la sociedad a una identidad de grupo unidimensional.

Ahora bien, ¿cómo compatibilizar esta pasión por la delimitación con una sociedad cada vez menos divisible? ¿Con un mundo de diásporas internas y externas? Ésta es una realidad que puede comprobarse cada vez más claramente en cualquier gran ciudad del mundo y en cualquier campeonato de fútbol. La heterogeneidad regresa incluso a los Estados étnicamente depurados a través de la globalización económica, la inmigración, el asentamiento de poblaciones y el movimiento de personas de orígenes muy diversos.

La nacionalidad unidimensional no existe ya ni siquiera en el caso de personas individuales. Hoy un empresario de la construcción irlandés, asentado desde mucho tiempo en Londres (y, por lo demás, con derecho de sufragio tanto en Gran Bretaña como en Irlanda), viajará sin ningún pro-

blema para pasar el fin de semana, para asistir a fiestas familiares o a acontecimientos deportivos al Oeste de Irlanda. Un individuo así no ha perdido sus raíces y tampoco tiene necesidad de buscarlas. Pero tampoco permitirá que se le reduzca a «irlandés unidimensional», simplificando su diversificada y multidimensional realidad vital.

Los viejos y nuevos nacionalismos buscan defenderse de la creciente avalancha que representa un mundo de personas nuevo, móvil y sobre todo *ajeno*. Y en esto estriba el peligro. Precisamente la extraordinaria libertad de movimientos de nuestro mundo les da alas. Por ejemplo, ha impulsado sobremedida el funesto fenómeno del nacionalismo a distancia (en expresión de Benedict Anderson). Pienso en los judíos norteamericanos ultraortodoxos y antiárabes, que juegan actualmente un papel tan nefasto en Israel, y especialmente en los territorios ocupados, y pienso también en los «voluntarios» albaneses y serbios del exterior, que se trasladan desde la República Federal Alemana o desde Francia para matar en la guerra civil yugoslava.

Y, con todo, hoy existe un peligro aún mayor. Porque hoy vivimos todos en condiciones de *apartheid*, que como se sabe era, en Suráfrica, un régimen que no separaba a las razas, sino sólo daba a unos derechos de los que privaba a los otros. El mundo rico, en el que vivimos, se compone de pequeñas y grandes fortalezas: los Estados nacionales de la Unión Europea, que teóricamente se defienden de la avalancha de pobres en busca de trabajo. En la práctica, sin embargo, entran en número cada vez mayor, aunque sólo sea porque la economía necesita de sus servicios. La mitad de los extranjeros se ve obligada a vivir ya hoy ilegalmente en la Unión Europea y, en la mayor parte de los casos, la otra mitad permanece en los diferentes países en situación provisional.

Existe, a mi modo de ver, el peligro de que dividamos la humanidad en dos partes: los «nuestros», provistos de derechos, y los «otros», la infraclase de los necesarios, pero políticamente invisibles. No forman parte de nosotros. Si vienen de los desdichados países de la miseria, la falta de derechos no es ninguna novedad: de todos modos tienen muy pocos derechos, no desean necesariamente permanecer en el país donde trabajan, aun faltos de derechos se ganan la vida mucho mejor que en su lugar de origen, y la ilegalidad es un problema sólo cuando es descubierta oficialmente. Todo esto hace mucho más fácil para nosotros no reconocerlos como personas iguales que nosotros, no reconocerlos como parte de nuestra comunidad.

Me pregunto si no estaremos en vías de acostumbrarnos, como antaño los surafricanos y hoy los israelíes, a un mundo de sistemática desigualdad de derechos. En ello estriba en todo caso, a mi modo de ver, el peligro principal del nacionalismo en los países de la Unión Europea. Los desgraciados pueblos de Europa suroriental, de todos modos, tienen urgencias más apremiantes. Los problemas de sus nacionalismos no serán resueltos ni por el terror serbio de masas en Kosovo ni por los bombardeos aéreos de la OTAN. Pero tampoco por una política que no parece propiciar una solución diplomática y que, en el mejor de los casos, como en Bosnia, hará depender el silencio de las armas de una ocupación, a cargo de fuerzas militares extranjeras y por tiempo indefinido, de territorios sometidos a «limpieza étnica». Los problemas balcánicos fueron ya una vez objeto de arreglo diplomático, lo que evitó una guerra de grandes proporciones. Fue en 1871, en el Congreso de Berlín auspiciado por Bismarck. Tal vez el canciller federal Schröder recuerde más fácilmente que Bill Clinton a su predecesor, el canciller imperial, quien, entre otras cosas, sabía cuándo es imposible solucionar los problemas a sangre y fuego.